

CERTIFICO: Que se anunció, escuchó relación y alegó por el recurso la abogada señora Carla Fernández. San Miguel, 15 de mayo de 2024. Javier Marchant Cabezas, Relator.

San Miguel, quince de mayo de dos mil veinticuatro.

Al escrito de folio 11: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que doña Carla Fernández Montero, abogada, interpone recurso de amparo en favor de **(1) Teresa del Carmen Osorio Navarro, (2) Rosa Humilde Ramos Hernández, (3) Ema Verónica Ceballos Núñez, (4) María Gabriela Órdenes Montecinos, (5) Palmira Isabel Almuna Guzmán, (6) Silvia Teresa Oyarce Pinto, (7) Elisa Magna Astudillo, (8) Teresa Navarro Navarro, (9) Luisa Durandin Villaseca, (10) Berta Jiménez Escobar, (11) Orfa Yolanda Saavedra Vásquez, (12) Gladys Calderón Carreño, (13) Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, (14) Celinda Aspe Rojas y (15) María Angélica Guerrero Soto**, todas internas privadas de libertad en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en contra de Gendarmería de Chile, representada por su Director Nacional don Sebastián Urra Palma, por aplicar restricciones a su régimen de visitas, vulnerando el derecho constitucional a la libertad personal y seguridad individual establecido en el artículo 19 N°7 en relación con el artículo 1° de la Constitución Política de la República.

Señala que el CPF de San Joaquín es un establecimiento penal femenino, que alberga a distintas condenadas por diversos delitos comunes, pero, además, hospeda a 15 condenadas por causas de DDHH, y que de acuerdo a la Ley N° 19.828 (Ley SENAMA) son adultas mayores de la tercera edad, cuyo promedio de edad es 75 años, todas con enfermedades de base y muchas, con patologías graves, incluso cánceres avanzados.

Relata que el 10 de abril pasado se les informó a las amparadas, de modo verbal, que se aplicaría un nuevo régimen de visitas el cual consiste en eliminar el día lunes, y mantener sólo el día domingo, pero en un horario restringido, de 9:00 horas a 12:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, debiendo las visitas hacer abandono del recinto del penal antes de las 12:00 horas para volver a entrar a las 14:00 horas, lo que en la práctica, y por la ubicación del penal, ha significado que las visitas duren sólo 3 horas a la semana. Igualmente se les señaló que las encomiendas serían recibidas sólo los domingos en la mañana, por lo que el exiguo horario de 3 horas de visita se acortaría a dos horas semanales. Finalmente se les señaló que las amparadas no podrían recibir a sus visitas en los espacios segregados de la población penal general en que se encuentran, y donde llevan casi dos años



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FYZJXNGXSTX

recibiéndolas los lunes y domingos, sino que serían trasladadas hasta el gimnasio del penal, lugar en que la población general recibe a sus visitas, medida que no solo pone en riesgo la integridad psíquica y física de las amparadas, sino, además, la de sus familiares y amigos que acuden a visitarlas, derivado del peligro latente de recibir algún tipo de agresión por parte del resto de la población penal o de sus familiares, destacando que hasta el cambio del régimen de visitas, Gendarmería de Chile no permitía a las internas y sus visitas transitar en el espacio existente entre el acceso del penal y el sector cerrado que las alberga (zona segregada), por el temor a que sean agredidas por otras internas del penal. De este modo, no se entiende ahora esta medida de juntar a todas las internas del penal en un gimnasio y durante todo el horario que dura la visita.

Señala que la información entregada a las amparadas ha provocado que ellas prefieran no recibir visitas durante el horario impuesto, lo que consecuentemente, ha repercutido negativamente en su salud mental y física, sintiéndose muy maltratadas por un Estado indolente e indiferente a su situación de vulnerabilidad, tanto por edad y condición de salud, como por sexo.

Enfatiza que la decisión adoptada por la recurrida significa en la práctica limitar o restringir desproporcionadamente sus visitas en una dimensión material y jurídica, siendo esta última un maltrato o tortura proscrita por el derecho.

Agrega que Gendarmería tiene un deber o posición de garante respecto de los internos privados de libertad en los recintos bajo su custodia y que al no cumplir con tal obligación infringe este deber de protección, deber que ha sido descuidado de diversas formas entre las cuales se identifican las siguientes: (a) Restringir el ya limitado derecho a contar con una vida familiar y que no se pierde por el hecho de caer preso y (b) - Aplicación de una normativa infra legal de manera draconiana, improcedente, innecesaria, irracional y sin sentido común.

Por lo antes expuesto, solicita que (i) se declare vulnerada la garantía antes referida; (ii) declarar ilegales los actos denunciados; (iii) que se ordene a Gendarmería de Chile que restituya el régimen de visitas anterior, esto es, los días lunes y domingos, de 10:00 horas a 17:00 horas; (iv) que ponga término a la obligación de recibir las visitas en el mismo lugar destinado para el resto de la población penal (el gimnasio), especialmente, teniendo en consideración el perfil etario, sexo y la salud de las amparadas; que dicha restricción afecta directamente la visita de su descendencia más querida y necesitada (hijos); y principalmente, el riesgo cierto de sufrir ataques a la persona de la interna o de sus familiares; (v) que se informe a esta Corte de



las medidas que se implementen para asegurar el restablecimiento del derecho, que dice relación con la protección de la seguridad individual y, el reconocimiento de la igualdad en dignidad y derechos de las internas afectadas; (vi) oficiar a Gendarmería de Chile a fin de ordenar que se ciñan estrictamente a las normas establecidas en la Constitución Política, la ley y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos vigentes en Chile, y aplicar el Decreto 518 de una forma acorde al principio de no contradicción, de tal forma de restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela de las personas vulneradas, terminando con la severa restricción al régimen de visitas y con la obligación de recibir a los familiares en espacios no segregados, sino comunes al resto de la población penal general; y (vii) se ordene al Juzgado de Garantía de Santiago realizar una supervisión constante del CPF de San Joaquín en las visitas semanales que realiza cada Juez de Turno, con el objeto de monitorear el estado de la situación.

Segundo: Que por su parte evacua informe Gendarmería de Chile, a través del abogado don Marcelo Carrasco Sepúlveda, quien refiere que esta instancia tutelar no es la idónea para discutir las circunstancias que se hacen presente en el libelo, en ese sentido, todas las internas del CPF Santiago, se encuentran privadas de libertad en virtud de una sentencia judicial dictada por un tribunal competente y que tiene efecto de cosa juzgada, están reclusas en el recinto y zona que administra Gendarmería de Chile y que responde a su segmentación particular, esto es, delitos de lesa humanidad. Hace presente, además, que no se trata de un recinto clandestino, sino que fue creado por Decreto Supremo para tales fines. Sostiene que, de acuerdo con el artículo 14 letra f) del Código Orgánico de Tribunales, los Juzgados de Garantía son los competentes para discutir una situación que se considera irregular y que afecta a los amparados con ocasión del cumplimiento de horario de visitas y encomiendas.

En cuanto a la medida adoptada, señala que por Ordinario N° 1404, de 24 de abril pasado, de la Alcaide del CPF Santiago, dirigido al Director Regional Metropolitano, se puso en conocimiento de la Autoridad Regional el resultado del Consejo Técnico celebrado, en donde por razones de equidad en el trato, y dando respuesta a una inquietud de la superioridad en cuanto al desarrollo de las visitas en lugares no contemplados para aquello, se modificó el lugar de encomiendas y visitas del penal, para dar cumplimiento a las instrucciones de la superioridad, lo que se efectuó con absoluto apego al conducto regular, celebrándose el Consejo Técnico pertinente, y procurando no vulnerar las obligaciones contenidas en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.



Respecto a lo aseverado en el recurso, observa que las internas jamás han tenido horario continuo los lunes y domingo.

Afirma que no es efectivo que las reclusas de la sección Esperanza se encuentran amenazadas por otras internas, ello se desmiente a través del Oficio Ord. N° 3119 del 06.12.22, a través del cual se remite al Sr. Director Regional copia del Acta Consejo Técnico en el cual fue aprobado el ingreso de la interna de la sección Esperanza para ser jornal de jardines en jardín Capilla, doña Ema Ceballos Nuñez, siendo imposible aquello si las internas estuvieran amenazadas como se describe, pues el hecho de ser jornal de la capilla implica necesariamente se desplace desde la Sección Esperanza (lesa humanidad) hasta el sector de la capilla.

Sostiene que de acuerdo a las Providencias que adjunta dan fé que las internas tienen asistencia de 7 ONGs, inclusive acceden a peluquera, kinesiólogo, y podólogo mensualmente, por lo que no están en situación de abandono o maltrato, mucho menos tortura.

Arguye que las internas con movilidad reducida y de la tercera edad, no son sólo las que están en el pabellón de lesa humanidad, no obstante aquello, todas deben estar sujetas al mismo trato, pues la situación de la gravedad de los delitos cometidos no es un antecedente válido para establecer tratos diferenciados, sino que sólo los problemas de desplazamiento atendida su edad podrían justificarla.

Concluye que Gendarmería actuó dentro del marco de sus atribuciones, de manera absolutamente legal, y no ha generado ningún abuso en el presente caso, y mucho menos puede imputársele una vulneración a la libertad personal y la seguridad individual, por el simple hecho de modificar el lugar donde se efectuarán las visitas.

Por esas razones, solicita que se declare inadmisibile la presente acción y en subsidio, que se rechace.

Tercero: Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República, consagra la denominada acción de amparo y dispone, en lo pertinente, que: *“Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.*

De igual forma, el inciso tercero de dicho precepto señala que *“El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La*



respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

Cuarto: Que consecuentemente, la acción ejercida en la especie tiene como finalidad y objeto la protección de la libertad personal y seguridad individual y es de naturaleza eminentemente cautelar o de tutela de urgencia. La libertad personal es entendida como la libertad física de la persona y como la libertad de movilización, desplazamiento o de circulación, inherentes a ella. Por su parte, la seguridad individual puede asumirse como un derecho complementario de los anteriores, que se traduce en la implementación de ciertos mecanismos cautelares, expresados en exigencias, requisitos o formalidades, tanto de orden constitucional como legal, cuyo propósito es cautelar ese derecho a la libertad personal, de los abusos de poder y de las arbitrariedades. Garantía expresada en el artículo 19 N° 7, letra b), de la Carta Fundamental, al manifestarse que nadie puede ser privado de su libertad individual ni ésta restringida *“sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes”*.

Lo señalado permite afirmar la procedencia del presente recurso ante este tribunal.

Quinto: Que del examen de los antecedentes y lo expresado por la propia autoridad resulta que respecto de la situación, condiciones y visitas de las internas de la Sección Esperanza (lesa humanidad) del recinto CPF Santiago, de la que dan cuenta ambas partes, la situación jurídica y de hecho se mantuvo por más de dos años en las condiciones relatadas por la recurrente, sin que haya existido alteraciones o situaciones especiales que justificaran alguna modificación del statu quo.

Sexto: Que, por el contrario, la decisión impugnada de la autoridad de Gendarmería aparece como un acto inmotivado, que altera la situación jurídica preexistente y afecta la dignidad de las personas recluidas, haciendo más duras y complejas las condiciones en que se desarrolla la vida de estas internas, más aún si se considera -como es de público conocimiento- su edad promedio, en el marco de los 75 años, existencia de enfermedades de muchas de ellas.

Séptimo: Que en tales condiciones, la decisión de modificar el régimen que regulaba las visitas de las recurrentes hasta el mes de marzo inclusive resulta ser ilegal desde que no tiene en cuenta las normas constitucionales aludidas por la recurrente y afecta un aspecto de la libertad ambulatoria y seguridad individual de las internas en el recinto penitenciario, lo que lleva a acoger el presente recurso.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FYZJXNGXSTX

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 21, ambos de la Constitución Política de la República, **se acoge** el recurso de amparo deducido en estos autos y se resuelve que se dejen sin efecto las decisiones de Gendarmería respecto de la Sección Esperanza (lesa humanidad) del recinto CPF Santiago reclamadas en el presente recurso, debiendo restablecerse de inmediato las condiciones de las visitas de las internas en los términos que se habían mantenido hasta antes de disponerse las modificaciones que por el presente fallo se suprimen.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°321-2024 Amparo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FYZJXNGSTX

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Ana Maria Cienfuegos B., Patricio Esteban Martinez B. y Abogado Integrante Juan Carlos Silva A. San Miguel, quince de mayo de dos mil veinticuatro.

En San Miguel, a quince de mayo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FYZJXNGXSTX